

ADMISIBILIDAD O NO DE UN RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY ANTIMARAS

por Francisco Daniel Gómez Bueso

Independiente de si es inconstitucional o no la mal denominada “Ley Antimaras” - que no es otra cosa que una reforma a la disposición contenida en el artículo 332 del vigente Código Penal, contenido en el Capitulo de los Delitos cometidos por los particulares, excediéndose en el ejercicio de los derechos que les garantiza la Constitución, donde se sanciona a los fundadores, cabecillas o conductores de pandillas ó grupos ilícitos, mediante el Decreto legislativo número 117-2003 del 12 de Agosto del año 2003- ha provocado alguna polémica.

Por un lado, hizo que el Presidente del Congreso Nacional tomara una bandera de lucha férrea en su defensa, al extremo de señalar que primero renunciaba antes que permitir se derogara la misma y llevando el tema al campo político. Postura motivada por los rápidos efectos que se han obtenido para combatir el tema de la criminalidad e inseguridad ciudadana, al cual se había comprometido el Gobierno de la República y que fue su lema de campaña. Por otro lado, los defensores de los derechos humanos y otros sectores independientes con el Gobierno, han señalado no solo discriminación y abusos en la implementación y ataque de tal problema social. Además apuntan que se esta atacando los efectos y no las causas del mismo, difiriendo en el tiempo el problema. En su concepto no basta con encerrar o encarcelar a los jóvenes involucrados en las maras, puesto que ello implica trasladar los problemas a las cárceles de nuestro país, tan atiborradas de presos sin condena y peor aún, sin esperanzas de lograrse su rehabilitación, porque tal elemento no forma parte de un verdadero tratamiento penitenciario que se les debe proporcionar a los que son sancionados por la sociedad, limitándoles en su libertad individual. Este extremo ha tenido relevancia con los hechos ocurridos recientemente en el Presidio de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, donde perdieron la vida 104 personas, todas ellas miembros de la denominada “mara salvatrucha”, lo cual es una repetición con otras circunstancias, de la masacre ocurrida en la Granja Penal de El Porvenir, Departamento de Atlántida, donde mataron a otros 69, hecho ocurrido hace un año aproximadamente y donde hasta hace unos días se ha ejercitado la acción penal para deducir la responsabilidad a los involucrados en tales hechos.

En la Constitución de Honduras, encontramos disposiciones que consagran, entre otros, el principio de que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, que todos tienen la obligación de respetarla y protegerla y que la dignidad del ser humano es inviolable. Donde, además se declara punible toda discriminación por motivo de raza, sexo, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. Asimismo, declara que toda persona es inocente mientras no sea declarada su responsabilidad por autoridad competente, que por supuesto es la jurisdiccional. También aparecen señaladas las garantías que sirven de instrumento para hacer efectivos esos derechos, declaraciones y principios constitucionales, como ser el Amparo, Habeas Corpus o de Exhibición Personal, Inconstitucionalidad y el de Revisión. Es por ello, que como Profesional del Derecho, me ha extrañado la determinación tomada por mayoría de los miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuando ha resuelto no admitir un Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por el señor WILLIAMS ALEXANDER ECHEVERRIA HERNANDEZ, a favor de si mismo y contra la reforma realizada al

referido artículo 332 del Código Penal, bajo el expediente con número de ingreso 133-2004. Según ha trascendido públicamente, ese Tribunal ya había emitido una opinión favorable al proyecto de dicha reforma, cuando previamente a su aprobación le fue solicitada por el Congreso Nacional.

Sin embargo, si bien la cuestión puede ser entendible desde el punto de vista político, al tratar de evitar otro enfrentamiento con el Poder Legislativo, como el que ocurriera cuando la Sala de lo Constitucional resolvió que era inconstitucional una reforma al texto de la Carta Magna y que generó desde ataques directos contra el Tribunal, la especulación de que serían separados de sus cargos los Honorables Magistrados de dicha Sala, hasta exigirse una aclaración del tema de quien debe contar con la facultad final de interpretar la Constitución de la República, y la negativa de ordenar la publicación de dicho fallo, rebeldía que hasta la fecha persiste. Tampoco deja de preocupar el precedente que se estaría fijando, cuando se rechaza un Recurso bajo tan débil y erróneo argumento. Basta analizar, que cuando el Tribunal emitió su opinión sobre el contenido del proyecto, en primer lugar entiendo que lo hizo la Sala de lo Penal, por tratarse de una reforma a una disposición del Código Penal, de carácter obligatoria conforme lo establecido en el artículo 219 de la Constitución de la República. En segundo lugar, lo que se revisó y se opinó fue de un proyecto de ley, que como tal puede aún sufrir modificaciones en el seno del Congreso Nacional, y por último, se realizó en abstracto, es decir, sin conocer de los cuestionamientos particulares que sobre la constitucionalidad o no de dicha Ley, pudieran realizar los que se consideren lesionados en su interés directo, personal y legítimo y que ejerciten tal garantía constitucional contenida en los artículos 184 y 185 de la tantas veces referida Constitución de la República.

Sobre tal particular, en una ponencia que realicé en el VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, realizado en la ciudad de Sevilla, España, en los primeros días del mes de diciembre del 2003, sobre el tema de la Facultad de Iniciativa de Ley de los Poderes Judiciales, señalé, que “Un aspecto que es de considerar es la situación que se presentaría para el caso de que un proyecto de ley presentado por la Corte, fuese cuestionado de ser inconstitucional, que si bien en mi país no se ha dado, por la escasa actividad realizada en esa materia, pero, que cabe la posibilidad que a futuro exista y de lo cual se produciría un conflicto serio y complicado”. De lo cual expuse que no solo no podía vedarse a los particulares el derecho de utilizar esa garantía, sino, que lo que elaboraba o preparaba el Tribunal Supremo, dentro de la facultad de iniciativa de Ley que cuenta en los asuntos de su competencia, conforme el artículo 213 de la Constitución de la República, era simplemente un Proyecto y que para ser Ley de la República, debía ser sometido al proceso legislativo. Dado que es el Congreso, en última instancia el responsable de su aprobación, se entiende que una vez promulgado como Ley, bien podía ser revisado por la Sala de lo Constitucional, ya que esa es una de sus atribuciones principales conforme lo dispone el artículo 316 reformado de la Carta Magna.

Dicho asunto ha pasado a conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, donde debe revisarse a profundidad tal resolución denegatoria de la admisión de tal recurso, lo cual en ningún momento puede implicar ninguna consideración sobre el fondo del asunto, sino sobre el debido proceso que debe dársele al mismo, entenderlo de otra forma y confirmar tal determinación. No sólo constituye un precedente funesto para el Estado de Derecho, sino la posibilidad de que nuestro País enfrente una acción

por denegación de justicia, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual nos dañaría también en nuestra maltratada imagen internacional.